

## El conflicto por las acciones afirmativas en Coahuila: ¿homofobia institucionalizada?

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes<sup>1</sup> y Gerardo Mata Quintero<sup>2</sup>

### Resumen

**P**recisamente hace una década, en 2013, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, comenzó a apuntalar su doctrina en torno a las acciones afirmativas como medidas compensatorias para revertir escenarios de desigualdad histórica y *de facto* que enfrentan ciertos grupos, como la población LGBTIQ+. Desde entonces, los tribunales, órganos administrativos electorales, autoridades, institutos políticos, candidaturas y ciudadanía, se han posicionado en un terreno de constante disputa por las acciones afirmativas en los procesos electorales federales y locales.

En este trabajo se relata el largo camino legislativo, administrativo y judicial que se siguió para la implementación de acciones afirmativas dentro del proceso ordinario de elección de diputaciones locales 2023 en Coahuila. La mirada que se propone, sin embargo, no es meramente descriptiva, sino que, a partir de un análisis fundamentalmente crítico, se demarcan las aristas de la lucha por las acciones afirmativas que se dio en Coahuila en el contexto del proceso electoral 2023, lo que permite reflexionar sobre cuestiones trascendentales, tales como: ¿qué autoridades deben diseñar estas medidas?, ¿qué modalidades de protección es legítimo introducir para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad? ¿a quiénes deben beneficiar estas acciones?, ¿cuáles son los alcances de las garantías que se implementen para la presencia real y efectiva de las poblaciones beneficiadas?

Pareciera que ya la jurisprudencia constitucional y electoral nos proporcionan respuestas a tales interrogantes, pero lo que muestra el caso Coahuila es que, a 10 años de su introducción al discurso judicial electoral, las acciones afirmativas aún constituyen un espacio de conflicto que

---

<sup>1</sup> Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Doctorando en derecho electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Profesor universitario.

<sup>2</sup> Maestro en derecho con acentuación en derechos humanos. Asesor del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila: [gerardo.mata@uadec.edu.mx](mailto:gerardo.mata@uadec.edu.mx)

puede ser analizado a la luz de una forma de «homofobia institucionalizada», en el que los derechos político-electorales de la comunidad LGBTIQ+ son disputados.

**Palabras clave:**

Acciones afirmativas, comunidad LGBTIQ+, modelos legales excluyentes, *gaslighting* judicial, homofobia institucional

**I. Luchas por las acciones afirmativas en PEL Coahuila 2023: un camino de retrocesos**

En el proceso electoral local ordinario (PEL) que inició formalmente en el estado de Coahuila el 1 de enero de 2023 se eligieron a las personas que ocuparán la gubernatura y que integrarán el congreso de la entidad.

En preparación del PEL, el Congreso de Coahuila, durante el año 2022, desarrolló trabajos legislativos con miras a modificar el marco jurídico electoral local que le sería aplicable. Así, y a raíz del cumplimiento de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en que ordenó al parlamento coahuilense llevar a cabo un proceso de consulta previa, libre, adecuada e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con presencia en la entidad (2021: 67-68), el órgano legislativo decidió realizar foros dirigidos a diversos grupos en situación de vulnerabilidad para “consultar” su opinión respecto de iniciativas de ley formuladas por el gobernador del estado y algunas diputaciones, en materia político-electoral.

Como resultado del ejercicio legislativo, los días 29 y 30 de septiembre de 2022, se publicaron en el periódico oficial del estado los decretos 270 y 271 que contenían las reformas a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza (CPECZ) y al Código Electoral para el estado de Coahuila de Zaragoza (CECZ), respectivamente, mismas que cobraron vigencia al día siguiente de su publicación, por lo que habrían de ser aplicables al PEL 2023.

Dichas modificaciones normativas fueron impugnadas por diversos accionantes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se consideró como la creación de un diseño

electivo excluyente; con ello dio inicio a nivel judicial el conflicto por las acciones afirmativas en materia electoral para grupos en situación de vulnerabilidad y, con ello, el camino de retrocesos para los derechos político-electorales de la población LGBTIQA+ en el estado.

*A. Reformas a la Constitución y al Código Electoral de Coahuila: la inconstitucionalidad de un régimen legal excluyente*

El poder reformador local, entre otras cuestiones, decidió modificar el sistema electivo para la integración del congreso estatal que habría de tomar posesión en 2024, a través de la introducción de un modelo que fue presentado como “novedoso”, de forma que en aquella tuvieran cabida los grupos en situación de vulnerabilidad con presencia en la localidad, y que incluían a: personas jóvenes, con discapacidad, pertenecientes a comunidades indígenas o minorías, víctimas de crímenes de lesa humanidad o aberrantes, migrantes o desplazadas internas, en pobreza, y de orientación sexual o identidad de género no normativa<sup>3</sup>, pero se dejó abierta la posibilidad de cualquier otra “persona o grupo en situación vulnerable frente al resto de la población o que comprometa el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad de oportunidades con los demás”<sup>4</sup>.

Esencialmente, se creó un “sistema de representación proporcional de grupos históricamente vulnerados”, de forma “paralela al sistema de mayoría relativa y de representación proporcional que establece la ley”, consistente en la creación de dos “circunscripciones específicas” en que se dividiría el estado, para la elección de dos “diputaciones de representación proporcional reservadas para grupos en situación de vulnerabilidad”<sup>5</sup>, y que serían adicionales a las 25 hasta entonces existentes, con lo que la

---

<sup>3</sup> Como se desprende del artículo 81 de la Carta de Derechos Políticos de Coahuila de Zaragoza (CDPC). Por criterio reiterado con posterioridad por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TECZ), la categoría prevista en dicha norma relativa al “sexo o género”, no refiere a las mujeres, sino a la identidad de género; además, por lo que hace a personas privadas de libertad, debe considerarse que existen limitaciones físicas y materiales para que éstas puedan ser sujetas de medidas compensatorias con el objeto de garantizar su participación política, especialmente en cuanto al ejercicio de su derecho a ser votadas.

<sup>4</sup> Artículo 33, párrafo primero, fracción IV, de la Constitución local, reformado mediante el decreto 270.

<sup>5</sup> Artículo 33, párrafo primero, fracciones II y III, de la Constitución local, reformado mediante decreto 270.

integración del congreso aumentaría a 27 curules: 16 electas por el principio de mayoría relativa (MR), 9 electas por el principio de representación proporcional (RP), y 2 por el principio de representación proporcional “específica” o de grupos en situación de vulnerabilidad (RPE).

Para controvertir la (in)constitucionalidad de dichas reformas a nivel local, los partidos políticos Unidad Democrática de Coahuila (UDC), el Partido del Trabajo (PT), Morena, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovieron demandas de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, mismas que fueron admitidas con los números de expediente 142/2022 y sus acumuladas, 145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 151/2022.

A pesar de que, como se verá más adelante, la SCJN no fijó un pronunciamiento sobre la (in)validez del modelo adoptado por Coahuila, pues la sentencia se concretó en estudiar el proceso legislativo seguido en relación con los estándares de la consulta a comunidades indígenas y afromexicanas y a personas con discapacidad, resulta no sólo útil, sino necesario analizar los alcances de aquel modelo, especialmente porque luego será retomado, aunque con variaciones, por el tribunal electoral local, en este camino de retrocesos.

Para lograr dicho objetivo, se propone una metodología de análisis implementada por el Tribunal Constitucional a partir de una perspectiva de la igualdad y la no discriminación. En efecto, la Primera Sala de la SCJN, al estudiar la cuestión relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo en las normativas civiles de las entidades federativas, partió de la consideración de que ninguna de ellas prohíbe expresamente su celebración y sanción por parte del estado. Lo cual, no obstante, no agotó la discusión sobre la (in)constitucionalidad de tales normas.

A partir de los estudios de filosofía del lenguaje moral y jurídico de John Austin (1982), se tiene que una norma jurídica es un acto de habla, en particular un enunciado, y éste es un acto ilocutivo, que es un acto de habla que consiste en decir algo y, junto con ello y de forma simultánea, en hacer también algo más, como aseverar, mandar, permitir, promulgar, declarar, definir, entre otras acciones. Esta consideración fungió como premisa para el análisis de validez de las normas que aplicó la Corte al estudiar el régimen legal matrimonial.

En tal contexto, la SCJN pudo distinguir claramente entre la parte dispositiva y la parte valorativa de las normas. Esto es: la parte dispositiva incluye la distribución de derechos, obligaciones, facultades, atribuciones y conductas de los diversos sujetos de derecho,

individuales o colectivos, naturales o jurídicos, públicos o privados, etc. Mientras que, por otro lado, se acepta que las normas no sólo regulan conductas, sino que, a través de su parte valorativa, transmiten mensajes, mismos que no son neutrales, sino que reflejan una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general (SCJN, 2014b). De acuerdo con esta premisa, es posible considerar no sólo la distribución diferenciada de derechos y obligaciones entre dos grupos, para determinar una infracción al principio de igualdad y no discriminación en su vertiente de trato. Además, se debe considerar las valoraciones, positivas o negativas, que subyacen a los mensajes contenidos en las normas, siendo que aquéllas pueden perpetuar o agravar los contextos de discriminación hacia determinados grupos histórica, sistemática y estructuralmente excluidos, subordinados o inferiorizados.

Bajo tal premisa, se hace necesario: a) señalar si de una norma (o conjunto de normas) es posible extraer un mensaje perceptiblemente objetivo —explícito e implícito— del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etc., que permita afirmar que dicho mensaje es extraíble de la norma; b) se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del art. 1 constitucional, del cual el agraviado sea destinatario por pertenecer al grupo identificado; y, c) existe una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito de validez territorial, sobre la cual se espera la proyección del mensaje (SCJN, 2014c).

De acuerdo con esta doctrina, denominada jurisprudencialmente como “estigmatización legal” o “discriminación normativa”, se tiene que el sistema normativo *per se* es capaz de producir y reproducir no sólo una desigual distribución de derechos y obligaciones entre grupos, sino también transmitir mensajes explícitos o implícitos que perpetúan o agravan los contextos de discriminación, desventaja o desigualdad histórica entre grupos, colectivos o personas. Así las cosas, la discriminación normativa se puede actualizar ya sea por la existencia de una exclusión tácita de un beneficio previsto en ley, o bien por diferenciación expresa (SCJN, 2015c).

De esta forma, la discriminación por exclusión tácita de un beneficio tiene lugar cuando el poder reformador crea un régimen jurídico implícitamente y de forma injustificada excluye de

su ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa; mientras que en tratándose de la discriminación por diferenciación expresa, la exclusión es totalmente explícita, toda vez que se crea un régimen jurídico distinto para ese supuesto de hecho o situación equivalente (SCJN, 2015d).

Lo anterior es así porque, aunque se reconozcan exactamente los mismos derechos y obligaciones, pero a través de dos instituciones, figuras o modelos jurídicos diferenciados, en el que sólo uno se crea para uno de los grupos, ello implica la creación de un régimen de “separados pero iguales” que perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, lo que ofende su dignidad como personas (SCJN, 2015a).

Ahora bien, a través de las modificaciones implementadas a nivel local, frente a los principios constitucionales de MR y de RP, el órgano revisor de la Constitución local introdujo y reguló un sistema electivo “paralelo”, cuyos destinatarios lo eran los grupos en situación de vulnerabilidad. Y como es posible dilucidar, la mayoría de las causas de vulnerabilidad previstas en el orden jurídico local, son a su vez consideradas por la jurisprudencia internacional y constitucional como categorías sospechosas, tales como el género, la edad, las discapacidades, y la orientación sexual o identidad de género.

Este sistema paralelo era *específico* para los grupos en situación de vulnerabilidad indicados —así como *cualquier otro similar*—, por lo que expresamente se creó de manera diferenciada al sistema de elección por los principios de MR y de RP que establece la ley. Así, a estos dos principios “ordinarios”, se incorporó una tercer vía de elección, creada *específicamente* para *todos* los grupos vulnerables, que se denominó normativamente como principio de representación proporcional *específico* (RPE). La implementación de la RPE implicaba la creación de dos circunscripciones electorales “específicas” y “especiales” que abarcaban todo el territorio del estado de Coahuila.

Y si bien es cierto que la reforma al Código Electoral reconocía los mismos derechos y obligaciones que corresponden a las candidaturas postuladas mediante RP a las candidaturas postuladas en la lista de RPE, es igualmente cierto que de la parte valorativa de las normas constitucionales y legales locales reformadas se podía evidenciar la creación de un régimen

jurídico diferenciado, uno que es “ordinario” para cualquier persona, y otro que es “específico” “especial” y “paralelo” al primero, creado expresamente para grupos en situación de vulnerabilidad, utilizando categorías sospechosas como la discapacidad, la edad, el sexo-género, la orientación sexual, la autoadscripción como persona indígena, entre otras.

En tal sentido, y como se ha reconocido en la jurisprudencia constitucional, la relación entre el lenguaje y la identidad de las personas conlleva una mezcla compleja de factores individuales, sociales y políticos que permite, ya sea que aquéllas se consideren como integrantes de una cierta colectividad o bien se sientan excluidas de ella. Así, el lenguaje puede tener como función el facilitar la eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización, o al contrario, la de influir la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando prejuicios sociales, mismos que sirven de base para que las prácticas de exclusión se arraiguen en la sociedad mediante expresiones que predisponen la marginación de ciertos grupos (SCJN, 2015b).

Ello cobra aún mayor relevancia cuando el lenguaje utilizado proviene de una fuente normativa, pues, como se avanzó previamente, la parte valorativa de las normas transmiten mensajes —construidos por el lenguaje legal— que implican un juicio positivo o negativo relativo a conductas, prácticas, dinámicas sociales, de lo que está permitido o prohibido, como una valoración oficial por parte del Estado.

De esta forma, en primer lugar, se debe destacar que los términos utilizados por el poder reformador local, tales como “especial/es”, “paralelo”, “reservado”, en oposición a “ordinario/s”, resulta estigmatizante, considerando que los grupos a quienes van dirigidas las regulaciones han sido históricamente categorizadas como “anormales”, “desviadas”, “subnormales”, en oposición a un estándar de lo “normal”, lo “natural” y lo “ordinario”.

El lenguaje utilizado, entonces, en lugar de propender hacia la eliminación de las prácticas de diferenciación, lo que hace es reforzarlas, reproduciendo con ello prejuicios sociales lacerantes hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente aquéllos a los que se les ha asignado características o atributos inherentes a sus corporalidades que no encajan en lo “ordinario”, en un deber ser ideal —que es capacitista, cisheterosexual, masculino, física y mentalmente pleno, joven—.

Adicionalmente, es posible considerar que a la creación de este sistema electivo paralelo y especial, frente al ordinario, le subyace un juicio de valor implícito ambivalente que corre en dos sentidos: uno positivo, donde el estado considera que los sujetos ordinarios desarrollan la competencia electoral en condiciones de plena normalidad; y otro negativo, donde el estado confina a todos aquellos otros sujetos no ordinarios, para que entre ellos compitan electoralmente por un escaño en la conformación del órgano legislativo. Esta diferenciación normativa perpetúa un mensaje de minusvalía, al no ser las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad merecedores para presentarse por las vías ordinarias de elección. Y si bien es cierto que postular por RP a personas pertenecientes a estos grupos estaba *permitido*, un análisis de medidas legislativas como ésta, que utiliza categorías sospechosas, requiere un estudio exhaustivo y estricto respecto de su diseño, efectos y consecuencias diferenciadas.

En tal esquema, debe reconocerse que las acciones afirmativas no pueden ser consideradas una forma de discriminación, sino al contrario, son medidas compensatorias que pretenden revertir contextos o escenarios de discriminación histórica y estructural (TEPJF, 2014a) hacia ciertos grupos inferiorizados por otro hegemónico. Por ello la SCJN (2018) ha considerado que las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación pueden tener lugar en distintos escenarios, uno de los cuales se da en el marco de la adopción de medidas especiales o afirmativas, mismas que son “tendientes a compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos” (2008).

En ese tenor, la Sala Superior del TEPJF (2014c) ha considerado que el principio de igualdad en su dimensión material requiere que se tomen en cuenta las condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, por lo que se “justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables”. De ahí que la Sala Superior concluye que “las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material”.

Por tanto, no sólo es permitido, sino incluso es exigido que el estado adopte medidas diferenciadas de compensación para *garantizar* el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia con el



objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades e inclusión. Estas medidas, bajo ningún concepto pueden considerarse como discriminación, **siempre que no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos**, ni se perpetúen más allá de un periodo razonable o después de alcanzado su objetivo, como se estatuye en los artículos 1.4 y 5 de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI), instrumento internacional vinculante para el estado mexicano.

Para valorar si el modelo adoptado por el estado coahuilense constituye un sistema de derechos separados para grupos distintos, debe partirse de considerar que el diseño constitucional en nuestro país funda la existencia de un sistema electivo mixto para la conformación de los órganos de representación popular, en los que deben coexistir el de mayoría relativa y el de representación proporcional, según se desprende de los artículos 52 a 54, 56 y 116, fracción III, párrafo tercero, de la CPEUM.

Según el criterio sostenido por la Suprema Corte (2011), el primero de los mencionados consiste en asignar cada una de las curules a la candidatura que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide el país o una entidad federativa; mientras que la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitido en su favor. De esta forma, es posible aducir que dado que en el sistema de mayoría el valor del voto se encuentra garantizado cuando cada sufragio tiene el mismo valor y está en las mismas posibilidades de otorgar un mandato a una determinada candidatura, el sistema de representación proporcional persigue otra finalidad diferente.

Este sistema electivo de RP, por su parte, está “diseñado para garantizar la pluralidad de los espacios deliberativos, permitiendo que en ellos también se encuentren representados los partidos minoritarios, en tanto que, al haber alcanzado el porcentaje mínimo de apoyo de la ciudadanía para conservar su registro, abanderan una corriente de pensamiento, la cual debe ser escuchada y participar en la toma de decisiones legislativas. Sin embargo, en este sistema no se vota por personas en lo particular, sino por los partidos políticos en tanto que son éstos como entidades de interés público los que han obtenido un apoyo con base en los programas, principios e ideas que postulan” (SCJN, 2014a).

Así las cosas, al ser dos sistemas electivos con finalidades constitucionales diferentes, los derechos a la participación política efectiva, al voto pasivo, al acceso en condiciones de igualdad de todas las funciones públicas, deben estar garantizados para las personas en situación de vulnerabilidad por ambos principios. Esto es, **no existe razón constitucional alguna para justificar que la garantía de un derecho político-electoral esté limitada al principio de representación proporcional**, cuantimás considerando que bajo este último esquema no se vota a las personas o grupos en lo particular, sino proyectos y programas partidistas, por lo que la representación efectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad queda en entredicho, al quedar supeditada a la representación de los intereses partidistas que no obtuvieron la mayoría de la votación en los procesos electorales de que se trate.

Así se concluye que los grupos en situación de vulnerabilidad sólo tenían garantizada una votación *indirecta*, mediante el mecanismo *ex profeso* creado de RPE, no así la votación *directa* que es la base de la representación por MR. Pero aún, los alcances de la acción afirmativa adoptada quedaron confinados a asegurar la participación política de los grupos en situación de vulnerabilidad por la vertiente del principio de RPE, no así por el principio ordinario de RP que ya se encontraba establecido constitucional y legalmente.

Ello, además de significar por sí una forma de **discriminación normativa en perjuicio de estos grupos, al crear una vía electiva paralela a los principios “ordinarios” de mayoría relativa y representación proporcional**, limita la eficacia de la medida compensatoria al no garantizar su participación efectiva ni aún por el principio ordinario de representación proporcional, lo que **genera una forma de exclusión indirecta hacia estas poblaciones** de las nueve curules en la sede parlamentaria local que se asignan bajo dicho esquema de elección, así como de los veinticinco escaños que se asignan por el principio de mayoría relativa.

Ello, a todas luces permite considerar que el modelo implementado por el poder legislativo de Coahuila constituyó un sistema de separados pero iguales, lo que es contrario a la finalidad que persiguen las acciones afirmativas y, por ende, reproduce modelos, prácticas y dinámicas de discriminación normativa por exclusión de los mecanismos de protección para los esquemas electivos ordinarios de MR y de RP ordinaria.

Desafortunadamente, la SCJN no tuvo oportunidad para hacer un pronunciamiento del fondo del asunto, dado que consideró acreditada por los accionantes la vulneración del procedimiento legislativo cuyo producto lo fueron las modificaciones normativas impugnadas, ello por considerar que los foros de “consulta” no satisficieron los estándares del derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y a las personas con discapacidad con presencia en el estado. Con ello, el Tribunal Constitucional en sesión de 5 de enero de 2023 declaró la invalidez absoluta de los decretos 270 y 271, y ordenó la reviviscencia de la legislación constitucional y electoral vigente previo a la publicación oficial de dichos decretos.

*B. Lineamientos de Acciones Afirmativas 2022: revés judicial a la garantía de derechos*

El 23 de diciembre de 2022 el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó por mayoría de cuatro contra tres el acuerdo IEC/CG/105/2022 que estableció una serie de acciones afirmativas en favor de tres grupos históricamente vulnerados: LGBTIQA+, personas con discapacidad y juventudes. Cada uno de estos grupos se eligió en virtud de su exclusión y discriminación histórica y estructural además de su representatividad poblacional a fin de establecer tales cuotas bajo los criterios de objetividad y proporcionalidad sostenidos por el TEPJF (2018).

Antes de continuar y para clarificar este apartado, debemos decir que aunque se aprobaron acciones afirmativas para tres grupos distintos, nos enfocaremos solamente en la cuota para personas LGBTIQA+. Esto debido a que justamente es el tema central de nuestro análisis, por lo que a partir de este momento se abordará únicamente respecto de esta cuota.

La argumentación que sostuvo el acuerdo del OPLE se basó principalmente en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, contenidos tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales que explicitan el principio de igualdad y no discriminación, en concatenación con otros otros derechos de carácter político-electoral. En el entendido de que la participación pública y política de las personas de la diversidad, así como su derecho de acceder a las acciones afirmativas en su beneficio proviene de una interpretación sistemática y funcional de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por otro lado, el acuerdo también se construyó conforme a los diversos criterios jurisprudenciales que hasta ese momento se habían emitido tomando como referencia que las acciones afirmativas constituían un piso mínimo y no un techo, como ya lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF (2020; 2021d). En el primer caso, la Sala Superior además estableció que “una acción afirmativa facilita el acceso a cargos públicos cuando las personas enfrentan discriminación y/o situaciones estructurales de desigualdad” (2020: 88), por lo que resolvió que se debían postular 9 candidaturas de RP en “aras de revertir la desigualdad estructural e histórica en la que se han visto inmersos tanto las personas indígenas como las mujeres” (108).

De la misma forma, tanto en el SUP-RAP-21/2021 así como en la contradicción de tesis 275/2015 del Pleno de la SCJN se ha determinado que la representación proporcional es una vía para incorporar a personas que forman parte de grupos excluidos, subrepresentados e invisibilizados que, a partir de los mandatos de una democracia representativa e incluyente, tienen que ser urgentemente integrados en los espacios de deliberación y toma de decisiones. En ese contexto, para la Sala Superior, “las acciones afirmativas son medidas temporales que permiten acelerar la presencia, en los espacios públicos y de toma de decisiones, de quienes forman parte de sectores sociales subrepresentados o en situación de vulnerabilidad” (2021: 55).

En ese orden de ideas, las acciones afirmativas en favor de grupos históricamente vulnerados constituyen un mecanismo de avance para permitir el mayor acceso posible de las personas que pertenecen a estos grupos, acelerando así su inclusión en órganos y posiciones de toma de decisiones dentro de los poderes públicos. Por lo que su inclusión dentro de los lineamientos estaba plenamente justificado con base no sólo en la ley sino también en los diversos criterios jurisprudenciales de la materia.

Siguiendo esa tesitura, la mayoría del Consejo General del IEC consideró que las acciones afirmativas genéricas contenidas en las reformas constitucionales que hubo en la entidad eran insuficientes y debían ser complementadas con acciones afirmativas concretas y específicas que impulsaran la participación política de otros grupos que hasta la fecha siguen sin poder formar parte del Congreso estatal, como lo son las personas LGBTIQ+. Así las cosas, se incluyó en favor de estos grupos cuotas específicas a fin de crear mejores condiciones para su acceso a las diputaciones locales por los principios de MR y RP.

Esta decisión tampoco fue discrecional o arbitraria sino que se sustentó en los criterios de Sala Monterrey (TEPJF, 2021b) respecto de las cuotas específicas y de Sala Xalapa (TEPJF, 2022) respecto de los dos principios constitucionales de MR y de RP, decisiones las cuales fueron posteriormente confirmadas por la Sala Superior al resolver los SUP-REC-117/2021 y el SUP-REC-123/2022, respectivamente.

En el juicio SM-JDC-59/2021, la Sala Monterrey del TEPJF (2021b) sostuvo que para garantizar la participación política como representantes populares a favor de personas de la comunidad LGBTIQ+ y con alguna discapacidad, el Instituto electoral debió implementar como acción afirmativa específicamente una cuota.

En su argumentación la Sala Monterrey indicó que existe un deber de los partidos políticos de postular, como mínimo, la candidatura de alguna persona integrante de esas comunidades o grupos de personas en situación de desventaja, de manera que esa cuota concreta, pueda ser un medio realmente objetivo y eficaz para dicha participación. La eficacia de la acción tiene que ver con condiciones en las cuales exista una efectiva representación y no se desvirtúe la inclusión de los grupos, que tendrán la posibilidad real de acceder al cargo.

El criterio de la cuota específica fue reafirmado posteriormente por la Sala Superior, añadiendo incluso que “la cuota a favor de personas de la comunidad LGTBIQ+, lejos de privar a la ciudadanía de diversidad y pluralidad de opciones políticas, contribuye a representar los intereses de esos grupos y, por ende, a abastecer a la ciudadanía de más y diversas opciones políticas con las cuales se puedan sentir identificados” (TEPJF, 2021c: 38).

En la misma línea, luego la propia Sala Superior afirmó que: “las personas integrantes de la comunidad LGBTQ+ y otros grupos en situación de desventaja tienen derecho a gozar y ejercer, sin distinción alguna, todos los derechos y garantías dentro de nuestro parámetro de regularidad constitucional, resulta evidente que en el ámbito público deben contar con bases necesarias que les permitan vencer los obstáculos históricos, políticos y sociales que han enfrentado” (TEPJF, 2022c: 10).

Por lo que siguiendo estos criterios, la mayoría del Consejo General del IEC garantizó acciones para estos grupos a través de una cuota específica que además permeaba en los

principios de MR y RP, pues sólo así se podría asegurar su participación en igualdad de condiciones, tanto en la postulación como en la integración del Congreso de Coahuila.

No obstante, tal determinación administrativamente fue prontamente cuestionada por diversos partidos políticos que alegaban, entre otras cosas, una intromisión indebida por parte del IEC en su vida interna y autoorganización, así como una supuesta extralimitación por parte del órgano electoral al aprobar acciones afirmativas distintas a las creadas por el Congreso del Estado en los decretos 270 y 271, basándose en la supuesta violación a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. En su razonamiento, si ya existía una acción afirmativa en la ley local aunque esta fuera genérica e indeterminada, el OPLE no podía crear ninguna distinta.

En este contexto, el Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza (TECZ), en una de la sentencias más cuestionables por su incongruencia, determinó que no existía justificación para una cuota específica por ambos principios, apartándose expresamente de los criterios del TEPJF, argumentando que tal medida no era efectiva y que de alguna forma en su entender era más efectivo que la representación sólo fuera por RP, tratando de reintroducir el modelo de acciones afirmativas que la SCJN ya había invalidado, con lo que el TECZ dio un revés judicial a los derechos de la diversidad sexual logrados por el OPLE en el acuerdo 105/2022.

### *C. Sentencia del tribunal electoral local: el intento judicial de re-introducir el modelo legislativo invalidado*

Al resolver los juicios electorales locales TECZ-JE-02/2023 y sus acumulados, y el diverso expediente TECZ-JE-11/2012, el TECZ intentó re-introducir el modelo del acciones afirmativas ideado por el Congreso de Coahuila y aprobado mediante los decretos 270 y 271, cuyos alcances fueron explicados en el apartado A de este trabajo, y que constituyó lo que consideramos un régimen legal excluyente.

Ambos decretos, como se adelantó fueron invalidados de forma absoluta por la SCJN. Es así que, aprovechando el supuesto vacío legal que quedó al ser invalidada la norma, el TECZ intentó re-introducir el modelo anulado por la Corte argumentando entre otras cosas que: la

atipicidad del PEL 2023, que la emisión de una convocatoria firme para esa elección y una “plenitud de jurisdicción” que le permitía crear directrices invadiendo la esfera de competencias del OPLE.

Respecto del primer punto el tribunal local afirmó, que era necesario abrogar el tema del número de diputaciones que habrían de integrar el Congreso de Coahuila debido a que se había generado un estado de incertidumbre dadas las resoluciones judiciales que habían rodeado este tema. Y con base en la supuesta “certidumbre” que el tribunal buscaba dar, decidió que se sostendrían las 27 diputaciones para la conformación del poder legislativo local.

Para llegar a esa conclusión el TECZ sostuvo que, “derivado de que no era materia central de las impugnaciones y, por ende, no existe pronunciamiento que, de manera tajante, afirme que las 27 diputaciones han dejado de existir. En efecto, el control de normas realizado por las SCJN únicamente se pronunció sobre el modelo inclusión bajo la lógica de 2 circunscripciones especiales para asegurar una medida afirmativa, pero no abordó lo relativo a que la composición de 27 diputaciones fuera más allá del modelo de inclusión, pues la misma forma parte del diseño político de un órgano del Estado” (TECZ, 2023: 20).

En otras palabras, si bien la Corte invalidó toda una norma, el hecho de que no haya sido acuciosa en especificar que las 27 diputaciones habían dejado de existir, entonces posibilitaba al tribunal local para mantener el modelo invalidado. Así, en la sentencia mencionada textualmente se dijo: “el Pleno de este Tribunal Electoral en estricto apego a los principios previstos en los artículos 41 y 116, fracción II de la Constitución Federal, para el presente proceso electoral deberán elegirse 27 diputaciones locales que integrarán el Congreso del Estado, correspondiendo 16 al principio de mayoría relativa y 11 al principio de representación proporcional, porque representan derechos adquiridos para la ciudadanía y participantes en el proceso electoral” (*Ibid*).

A la postre este párrafo se convirtió en un monumento a las falsedades por que: 1. No fue aprobado por el Pleno, sino por una mayoría; 2. no tuvo estricto apego a los artículos 41 y 116 constitucionales, pues fue revocado de plano por la Sala Monterrey dos días después de haberse dictado; 3. no se eligieron 27 diputaciones; y, 4. no se consideraron las 2 diputaciones extra como derechos adquiridos para la ciudadanía ni para los participantes del proceso electoral, entre otras cosas porque en ese momento ni siquiera había tenido lugar el registro de candidaturas.

Por otro lado, el tribunal coahuilense utilizó como argumento que el acuerdo IEC/002/2023 en el que se emitió la convocatoria para el PEL 2023 había quedado firme, por lo que no era óbice una sentencia del Tribunal Constitucional, para dejar de observar las 27 diputaciones convocadas por acuerdo del OPLE. Respecto de este asunto el TECZ afirmó que una sentencia propia —el TECZ-JE-11/20123—, dejó firme el acuerdo del IEC relativo a la emisión de la convocatoria para la elección de diputaciones al Congreso local, con la integración de 27 diputaciones, obviando el hecho de que la norma formal y materialmente legislativa fungió como fundamento jurídico para las 27 diputaciones había dejado de existir por orden judicial, re-introduciendo con ello el modelo, a partir de un acuerdo del OPLE no impugnado judicialmente.

Respecto del asunto TECZ-JE-11/2023, el tribunal electoral local determinó que todos los acuerdos realizados por el IEC bajo las normas invalidadas por la SCJN tendrían validez hasta en tanto no hubiera una resolución judicial en contrario. No obstante, esta regla implementada por el tribunal dejó fuera los acuerdos relativos a los principios de paridad y acciones afirmativas, porque el órgano jurisdiccional estimaba que tales acuerdos habían dejado de existir por virtud de la acción de inconstitucionalidad 142/2022, lo cual desde luego no era correcto, dado que de ser así, todos los acuerdos del IEC bajo las normas invalidadas deberían ser inválidos también.

Tales argumentos sirvieron al tribunal local para arrogarse una “plenitud de jurisdicción” en razón de lo “atípico” de la situación, como lo afirmó en el apartado de los efectos de la sentencia, en la cual el órgano judicial primero determinó la necesidad de “suplir la falta de medidas para garantizar el principio de igualdad y no discriminación para el acceso a los cargos públicos” (TECZ, 2023a: 37). El problema es que no lo hizo al momento de dictar la sentencia sino que dejó el asunto *subjudice* hasta la resolución del expediente TECZ-JE-02/2023 y sus acumulados, lo que si era a todas luces atípico y fue una de las razones por la que la Sala Monterrey determinó revocar este efecto.

Asimismo, el TECZ de manera más extraña aun decidió vincular al Consejo General del IEC para que “se abstengan de consultar, elaborar, discutir y aprobar lineamientos de paridad y grupos vulnerabilizados, pues será este órgano jurisdiccional el que, con plenitud de jurisdicción y en aplicación directa de los principios previstos en el bloque de constitucionalidad local,



determine las directrices necesarias para dotar de certeza las siguientes etapas del proceso electoral” (TECZ, 2023a: 27).

La orden judicial además conllevó una amenaza consistente en imponer medidas de apremio a los integrantes del órgano electoral si realizaban tales acciones. La justificación del Tribunal para este desafortunado mandato fue evitar “el posible dictado de resoluciones contradictorias, pues la continencia final de la causa quedará resuelta por este órgano jurisdiccional y, en su caso, se controvierta de forma directa y definitiva ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Al final, Sala Monterrey dejaría sin efectos esta sentencia y determinaría que el IEC es la única autoridad que puede emitir lineamientos, determinando que la decisión del tribunal responsable de reservar jurisdicción para emitir lineamientos, restringía innecesariamente el debido ejercicio de las funciones constitucionales y legales para la organización de elecciones, conferidas al OPLE (TEPJF, 2023a).

#### *D. Lineamientos de Acciones Afirmativas 2023: una protección debilitada de derechos*

Luego de que las determinaciones del TECZ que impedían al IEC implementar acciones afirmativas fueron revocadas por la Sala Monterrey, la lucha por las cuotas arcoíris volvió nuevamente al campo de acción del OPLE. Sin embargo, de manera sorpresiva, la mayoría que se había formado en torno al acuerdo IEC/CG/105/2023 no se mantuvo y las acciones afirmativas específicas y por ambos principios que se habían logrado, cambió a una cuota genérica y únicamente por representación proporcional.

De esta forma los lineamientos de acciones afirmativas contenidos en el nuevo acuerdo IEC/069/2023 tuvieron diferencias sustanciales que afectaron los alcances y modalidades de protección de las acciones afirmativas que fueron previamente implementadas mediante el acuerdo 105/2022, lo que implicó una trasgresión del principio de progresividad y conllevó a un incumplimiento de la prohibición de no regresividad a cargo de todas las autoridades públicas del país, en relación con un nivel de protección que ya había sido alcanzado para garantizar los derechos político-electorales de ciertos grupos histórica y estructuralmente excluidos, como lo son las personas LGBTIQ+, con discapacidad y jóvenes.

Entre los cambios más destacados se encuentran:

1. La eliminación de un mecanismo específico previsto en el artículo 11 de los Lineamientos aprobados por el acuerdo 105/2022, cuya finalidad era evitar el fraude a la ley en perjuicio de la población LGBTIQ+ (lo que ya ha sucedido en otras entidades federativas); el artículo 10 del proyecto conserva el mecanismo, pero eliminó la referencia a la comunidad LGBTIQ+, lo cual significa la pérdida de una forma de garantía específica que atendía una situación concreta en beneficio de este grupo.
2. Los artículos 13 y 14 de los nuevos lineamientos materializaron una grave regresión en las medidas compensatorias que fueron previstas en los artículos 14 y 15 de los Lineamientos que fueron aprobados en el acuerdo 105/2022 del Consejo General, debido a que:
  - a. Eliminaron las cuotas específicas creadas para beneficiar a personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y personas jóvenes, mismas que son sustituidas por una cuota genérica a la que puede acceder cualquiera de los siete grupos mencionados en la Carta de los Derechos Políticos del Estado de Coahuila, así como cualquier otro en situación de vulnerabilidad. Debe enfatizarse que la determinación de esos tres grupos beneficiados en los primeros lineamientos obedeció a criterios de representación poblacional, al ser los que más presencia proporcional tienen en la entidad. La aprobación de los nuevos lineamientos significó que la acción afirmativa quedara diluida o repartida entre ocho distintas opciones, entre la cuales no existe comparación poblacional alguna, y cuya presencia real en la integración del Congreso obedeciera únicamente a una decisión política que realicen los partidos políticos que les postularon. Sin que hubiera llegado ninguna persona de la diversidad a ocupar el cargo.
  - b. Con los nuevos lineamientos hubo una menor del derecho a la postulación de estos grupos, puesto que no estableció obligación alguna por la vía electiva de mayoría relativa; en esos términos, no existió ninguna garantía de que estas personas fueran efectivamente postuladas para contender por dicho principio, como sucedió en el proceso electoral, pues ningún partido postuló personas de la diversidad por MR.
  - c. La garantía en la postulación de estos grupos quedó circunscrita a una sola postulación en la lista de representación proporcional, lo que siguió una lógica de representación de

intereses partidistas, pues bajo esta vía no se elige a las personas candidatas por voto directo, sino que busca abonar a la pluralidad partidista. Ello se materializó en que cada partido tuvo la decisión de fijar el orden de prelación de estas fórmulas en sus listas de RP, lo que implicó que la mayoría de ellos decidieran solamente hacer una postulación de grupos en situación de vulnerabilidad y ubicarla en el tercer lugar de la lista, con lo que se redujeron las posibilidades de asignación de curul por ese método.

- d. Finalmente, los artículos 30 y 31 de los nuevos lineamientos modificaron las reglas de ajuste previstas en los diversos artículos 29 y 30 de los Lineamientos aprobados en el acuerdo administrativo 105/2022. Así, al haber sido eliminadas las cuotas específicas de los tres grupos anteriormente beneficiados, bastó con que dos curules fueran ocupados por alguno de los ocho grupos en situación de vulnerabilidad para considerar cumplida la acción afirmativa. Y además, sólo en caso de que ello no resultaran de la elección por mayoría relativa, se procedería a realizar los ajustes en las listas de representación proporcional presentadas, y se establecerían las reglas para ello.

Como se hace patente, las garantías de protección de los derechos de voto pasivo, a la integración en condiciones de igualdad, al acceso a la función legislativa, y a una representación real, efectiva y visible de las personas LGBTIQ+, con discapacidad y jóvenes, se vieron considerablemente reducidas, diluidas y debilitadas, lo que significa un incumplimiento a la prohibición de regresividad.

Lo más grave de todo este caso fue que el mismo Consejo General que en diciembre de 2022, en consenso y con la participación de estos grupos, fijó un estándar de protección que respondía a la exigencia política de remediar la histórica y estructural situación de violencia y exclusión en que han sido ubicados, en marzo de 2023, decidió disminuir y limitar las garantías de su presencia real y efectiva en los espacios de ejercicio de poder público, lo que desde nuestra perspectiva reproduce dinámicas de denegación de derechos, silenciamiento y patrones de violencia institucional.

### *E. La decisión de la Sala Superior: gaslighting judicial*

En contra de la resolución dictada por el TECZ, se presentaron una serie de impugnaciones<sup>6</sup> cuestionando su validez, al menos en tres rubros: i) la conformación de la legislatura local en 25 diputaciones; ii) la falta de la implementación de una consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y a personas con discapacidad, para el diseño de las acciones afirmativas implementadas; y, iii) la determinación de las acciones afirmativas en forma de cuota electoral aplicable únicamente por el principio de RP y no por el de MR. Por cuestión de espacio, y por ser de interés particular para el objeto del presente trabajo, únicamente nos centraremos en la discusión señalada con el inciso iii).

En las demandas del juicio para la ciudadanía 124/2023 y del juicio electoral 1146/2023, las actoras reclamaron que, bajo el principio constitucional y convencional de igualdad y no discriminación, las autoridades electorales, incluido el tribunal local, debieron haber reservado **una curul por ambos principios electivos** para la población LGBTIQ+.

Las razones para sustentar tal necesidad se basan en: 1) una interpretación constitucional y convencional extensiva del principio de igualdad y de los derechos políticos fundamentales, requiere la realización de ajustes necesarios en las normas, traducidos en acciones afirmativas, para garantizar el derecho al voto pasivo en condiciones de igualdad, lo que debe abarcar ambos principios de elección popular dada la conformación mixta del sistema electoral mexicano; 2) que las acciones afirmativas no sólo tienen como finalidad garantizar el acceso a un encargo público, sino también tienen como función revertir la discriminación histórica y estructural de los grupos excluidos y asegurar su participación igualitaria en el plano político-electoral.

La respuesta judicial proporcionada por la Sala Superior fue en el sentido de calificar como infundados los agravios planteados, “ya que la parte actora parte de la premisa errónea de

---

<sup>6</sup> Algunos de los cuales se presentaron ante el tribunal local, otros ante la Sala Regional Monterrey, y otros más directamente ante la Sala Superior, declarando ésta última la atracción y acumulación de todos ellos: los juicios electorales 1142/2023 (por Salvador Clavel Ramírez, como adulto mayor), 1143/2023 (por Noé Catarino Reynosa Durón, como persona con discapacidad física parapléjica), 1144/2023 (por Luz Elena Morales Núñez), 1144/2023 (por Grace Mohanty Fernández Morán, como representante del colectivo de familias Buscando Desaparecidos México BÚSCAME), y 1146/2023 (por Miguel Alejandro Morales de la Rosa), los juicios de revisión constitucional 37/2023 (por el Partido Verde Ecologista de México), 45/2023 (por el Partido Revolucionario Institucional), 52/2023 (por el partido Unidad Democrática de Coahuila), y 53/2023 (por el partido MORENA), y el juicio de la ciudadanía 124/2023 (por Salma Luévano Luna, Noé Malacara Ruiz y Valeria Alicia Zamarripa Lozoya, como integrantes de la comunidad LGBTIQ+).

que se debe regular una acción afirmativa específica que le garantice participar por ambos principios” (TEPJF, 2023b: 24). Así, el tribunal consideró que existen distintos métodos y estrategias para implementar las medidas necesarias que garanticen los derechos político-electorales de la población LGBTIQA+, “de ahí que no existiera una única forma o una obligación de establecer la acción afirmativa” (2023b: 25). Por lo demás, si el tribunal local consideró innecesaria la acción afirmativa vía mayoría relativa, fue debido a que consideró que resultaba más benéfico que dicha medida fuera por la vía de representación proporcional (26).

Tal posición de la Sala Superior bien puede ser considerada como una forma de *gaslighting* judicial. En efecto, el “*gaslighting* es una forma de manipulación psicológica que busca implantar dudas en un individuo específico o en miembros de un grupo específico, haciéndoles cuestionarse su propia memoria, percepción o juicio” (Dorpat, 1994: 91-96), utilizando medios la negación persistente, la distracción, contradicción o la mentira, con el fin de desestabilizar a la víctima y deslegitimar la creencia de la víctima (1996). Sin embargo, este método de control encubierto no se ha registrado solamente en el micro-nivel de las relaciones de poder intersubjetivas, sino que también puede utilizarse de forma institucional o sistemática a un nivel meso-político de relaciones entre sujetos y el estado y sus instituciones.

Para Petric, el *gaslighting* sistemático e institucional “ocurre en regímenes totalitarios y corruptos (comunismo, nazismo, fascismo, crimen organizado) cuando un grupo de abusadores que sirven al régimen totalitario y al crimen organizado abusan de un grupo específico de individuos honestos que se oponen al totalitarismo y a la delincuencia organizada” (2018: 2). Sin embargo, consideramos que cuando se carece del elemento de sistematicidad en un contexto grave como los regímenes totalitarios, se puede no obstante identificar en las instituciones estatales decisiones, políticas o acciones que constituyan una forma develada de control y manipulación institucional hacia un grupo social, particularmente cuando éste se encuentra en una posición social y política de desventaja estructural e histórica.

Así, proponemos entender el *gaslighting* institucional como un mecanismo en que un órgano o institución del estado, mediante el ejercicio de sus atribuciones (como en el caso es la de adjudicación judicial), busca sembrar la duda en una persona o en un grupo social identificado, a través de una estrategia de negación, distracción, contradicción o de mentira, con el objeto o el efecto de deslegitimar o desestimar sus planteamientos, reclamos o peticiones.

Se sostiene que el presente caso encuadra en una forma de *gaslighting* judicial derivado de que el tribunal federal afirma que las actoras parten del “error” de exigir que la regulación de una acción afirmativa deba ser específica para las personas LGBTIQA+ y deba ser por ambos principios electivos, como si tales exigencias no estuvieran basadas en precedentes judiciales existentes e invocados persistentemente ante todas las instancias intervinientes.

Por una parte, las Salas Regionales del TEPJF con sede en Xalapa (2022b: 26 y 29-30) y en Ciudad de México (2021a: 37 y 44-45) habían previamente ordenado la implementación de cuotas, en vía de acción afirmativa, de personas que se autoidentifiquen como integrantes de la población LGBTIQA+, tanto por el principio de MR como por el de RP, como una forma de “reparación inmediata” de sus derechos. Por otro lado, fue la propia Sala Superior la que, en un precedente, reprochó al poder legislativo federal el que “**no ha implementado alguna medida específica** para garantizar los derechos político-electorales de las personas que integran la comunidad LGTBTTIQ+, para que puedan participar en la vida política y pública del país y asegurar que sean incluidas de manera igualitaria, plena y efectiva en la sociedad, como puede ser el acceso a los cargos públicos y de elección popular”<sup>7</sup> (TEPJF, 2022a: 44).

Entonces, ahora afirmar categóricamente que las actoras parten del “error” de exigir una acción específica para la población LGBTIQA+ que comprenda ambos principios electivos, se traduce en una forma de negación cuyo efecto es deslegitimar el reclamo planteado, generando la duda sobre el real alcance de la protección de los derechos-político electorales de esa comunidad.

Tal situación, valorada desde el contexto de un discurso judicial que hace énfasis en la “vanguardia” y “progresividad” de las decisiones jurisdiccionales que buscan garantizar la participación política de las personas LGBTIQA+, contrasta y contradice la solución ofrecida en este caso, lo que permite comprender que se trata de una forma de *gaslighting* institucional en el que un tribunal discursivamente asume y pregona un compromiso con un grupo social, pero cuya resolución termina por validar, mediante la negación, una situación de desventaja y desprotección de sus derechos. Situación ésta que quedará demostrada, como se verá ahora.

---

<sup>7</sup> Resaltado del original.

## II. Los resultados de las acciones afirmativas para las personas LGBTIQA+ para el PEL Coahuila 2023: apuntes de una forma de «homofobia institucionalizada»

La postulación de candidaturas por acción afirmativa en la vía de RP para la elección del órgano legislativo de Coahuila en el marco del PEL 2023, fueron las siguientes:

	Persona adulta mayor	LGBTIQA+	Mujer	Jóvenes
<b>PAN</b>	Fórmula 2 de la lista	X	X	X
<b>PRI</b>	Fórmula 1 de la lista	X	X	X
<b>PRD</b>	X	Propietario - fórmula 2 de la lista	Suplente - fórmula 2 de la lista	X
<b>PVEM</b>	X	X	Fórmula 2 de la lista	X
<b>PT</b>	X	Fórmula 2 de la lista*	X	X
<b>UDC</b>	Fórmula 2 de la lista	X	X	X
<b>MC</b>	X	X	X	Fórmula 2 de la lista
<b>MORENA</b>	X	X	X	Fórmula 1 de la lista

La elección de candidaturas por acción afirmativa en la vía de RP para la integración del Congreso de Coahuila en el marco del PEL 2023, fueron las siguientes:

	Personas adultas mayores	LGBTIQA+	Mujer	Jóvenes
<b>PAN</b>	0	0	0	0
<b>PRI</b>	1 fórmula	0	0	0

\* Originalmente, el PT registró como candidata suplente en la fórmula 2 de su lista por RP, a una mujer; sin embargo, mediante la sentencia TECZ-JDC-47/2023 y su acumulado, el tribunal local ordenó al OPLE acordar la cancelación de su registro, considerando que el “género” como situación de vulnerabilidad no debe entenderse como “mujer”; así, la integración de la fórmula debe corresponderse con la misma causa de vulnerabilidad para el caso de la candidatura propietaria como de la suplente. A pesar de que igualmente el PVEM registró una fórmula y el PRD una candidatura suplente de mujeres como “grupo en situación de vulnerabilidad”, tales registros no fueron impugnados judicialmente, por lo que quedaron firmes en sede administrativa.

	Personas adultas mayores	LGBTIQA+	Mujer	Jóvenes
<b>PRD</b>	0	0	0	0
<b>PVEM</b>	0	0	0	0
<b>PT</b>	0	0	0	0
<b>UDC</b>	0	0	0	0
<b>MC</b>	0	0	0	0
<b>MORENA</b>	0	0	0	1 fórmula
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Frente a los resultados alcanzados en la postulación de candidaturas y la obtención efectiva de curules para las personas LGBTIQA+, a este punto es dable sostener que la lucha por las acciones afirmativas dentro del PEL 2023 en Coahuila se enmarcó en un camino de retrocesos en la garantía de sus derechos político-electorales ante las distintas autoridades públicas involucradas: un poder legislativo local que diseñó un régimen electivo excluyente; un OPLE que en la primera oportunidad que tuvo abandonó sus propios criterios de protección de su participación política; un tribunal local que persistentemente buscó limitar los alcances de los mecanismos de participación implementados; y un TEPJF que, a través de la negación, deslegitimó los reclamos presentados por esta comunidad y convalidó la carencia de mecanismos suficientes e idóneos, compatibles con los estándares de protección, para el ejercicio real y efectivo de los derechos a la participación política en condiciones de igualdad, y al acceso a las funciones públicas de las personas LGBTIQA+.

Esta situación particular, cuando se considera el contexto amplio de desventaja estructural en que ha sido posicionada la población LGBTIQA+ en el país, excluida históricamente de los espacios de prestigio y legitimación social, y a partir de una perspectiva de igualdad y no discriminación, puede ser leída como una forma de “homofobia simbólica”. Ésta es distinta a aquellos contextos de homofobia que se expresan a través de la violencia física manifiesta o incluso de intentos de exterminio sistemático; sin embargo, no por ello es menos perniciosa.



Un tipo de homofobia simbólica es la “institucionalizada”, es decir, aquella que ejercen las instituciones del estado y de la sociedad civil a través de la discriminación o exclusión sistemática de individuos o grupos homosexuales (Cornejo, 2012: 89-90). En esa línea, resulta imperioso contrastar el discurso y la política judicial y de las autoridades administrativas en relación con la participación política efectiva de las personas LGBTIQA+ y sus derechos políticos, frente a su actuación concreta y la toma de decisiones dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias. E incluso, sería necesario efectuar el mismo ejercicio considerando los actores políticos, como candidaturas, partidos u otras organizaciones políticas, coaliciones y plataformas electorales.

El caso del PEL Coahuila 2023 ofrece referentes concretos e identificables de una práctica o dinámica —no asumida públicamente, por supuesto— en que han participado de forma más o menos activa distintos actores institucionales —poder legislativo, OPLE, partidos políticos, y órganos jurisdiccionales— que han tenido el efecto de reproducir relaciones de exclusión política o denegación del ejercicio efectivo de los derechos de representación de las personas LGBTIQA+.

Como se ha visto, el órgano parlamentario local, abanderando un discurso de compromiso hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, diseñó un régimen legal electivo excluyente, confinando las garantías de la participación política de estos grupos a un sólo método de elección popular indirecto (vía RPR) creado *ex profeso*, de forma paralela al sistema electoral mixto previsto constitucionalmente; además, mediante una estrategia de universalización, propia de todo sistema hegemónico —como lo es el Estado-nación— pretendió homogeneizar la situacionalidad y experiencias de aquellos grupos en un concepto universal ahistórico de “vulnerabilidad”.

De este tipo de mecanismos estatales deriva, sobre todo en el campo jurídico —en el sentido bourdiano—, una “postura universalizante” de la visión y de las disposiciones dominantes, quedando positivadas en las normas jurídicas y actuadas a través del “poder de nominación” (Bourdieu, 2001: 173-174 y 200-205).

Esta estrategia de universalización, que también abarca a los sujetos, persigue distintos objetivos, de acuerdo con el discurso —en el sentido foucaultiano— dominante, uno de los cuales implica despojarles de sus particularidades de forma que no puedan ser diferenciados, por lo que

será lo mismo hombre, mujer, negro, blanco, mestizo, indígena, homosexual, trans, persona con discapacidad, y cualesquiera otra posibilidad de diferenciación, quedando todas comprendidas — en el sentido de comprimir— y reemplazadas por sujetos o categorías “universales”, como la “condición de vulnerabilidad”, codificaciones que más que neutrales son neutralizantes, buscando anular el poder de agenciamiento derivado de la reivindicación de las diferencias y de las identidades políticas por ellas sostenidas.

Posteriormente, los partidos políticos, en tanto instituciones enmarcadas en la organización política estatal, y a pesar de asumir públicamente un discurso en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, buscaron cuestionar las facultades del OPLE de Coahuila para implementar acciones afirmativas en beneficio de ciertos grupos excluidos, como la comunidad LGBTIQ+, con el propósito de dejar intocado el régimen legal creado por el órgano parlamentario local, mismo que, como se ha abordado ampliamente, significó la implantación de un sistema de “separados pero iguales” en el ámbito electoral.

Luego, un tribunal electoral local, que pese a ostentarse como comprometido con los derechos políticos de las personas LGBTIQ+, minó las atribuciones y competencias de la autoridad administrativa en materia de acciones afirmativas, perpetuando los mecanismos de encubierta exclusión, a través de la acción judicial que delimitó la participación política efectiva de esta población —(con)fundida en la categoría de neutralizante de vulnerabilidad— a la vía electiva de RP, sin garantizar su representación por el principio de MR.

Finalmente, un tribunal federal que, en su última instancia, para convalidar la situación de precaria protección legal hacia los derechos políticos de las personas LGBTIQ+, incurrió en una dinámica de *gaslighting* institucional, recurriendo a la negación de las garantías ya obtenidas por esta comunidad ante distintas instancias y espacios y al cuestionamiento de la propia percepción y memoria en la lucha de esta población.

Todos estos elementos, cuando leídos en conjunto, marcan los puntos del conflicto por las acciones afirmativas en favor de las personas LGBTIQ+, en donde, con vista a los resultados nulos obtenidos en el PEL 2023, se hace imperioso develar las decisiones institucionales que reproducen la discriminación y exclusión real y simbólica de esta población, de forma que se analicen y, en su caso, denuncien los posibles escenarios de homofobia institucional.

## Referencias y bibliografía

- Austin, John. 1982. *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós.
- Bourdieu, Pierre. 2001. *Poder, derecho y clases sociales*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Cornejo Espejo, Juan. 2012. “Componentes ideológicos de la homofobia”, *Límite. Revista de Filosofía y Psicología*, vol. 7, núm. 26, pp. 85-106.
- Dorpat, Theodore L. 1996. *Gaslighting, the double whammy, interrogation and other methods of covert control in psychotherapy and analysis*. New Jersey: Jason Aronson Inc.
- \_\_\_\_\_. 1994. “On the double whammy and gaslighting”, *Psychoanalysis & Psychotherapy*, 11 (1), pp. 91-96.
- Petric, Domina. 2018. “Gaslighting and the knot theory of mind”. Berlín: ResearchGate.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2021. *Acción de inconstitucionalidad 285/2020*. Pleno. Ministro ponente: José Fernando Franco González Salas. Resuelta el 13 de julio de 2021.
- \_\_\_\_\_. 2018. Tesis jurisprudencial 1a./J. 44/2018, de rubro: “Derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado”. Primera Sala, 10a. época, registro: 2017423.
- \_\_\_\_\_. 2015a. Tesis jurisprudencial 1a./J. 67/2015, de rubro: “Exclusión de parejas del mismo sexo del matrimonio. El hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio”. Primera Sala, 10a. época, registro: 2010263.
- \_\_\_\_\_. 2015b. Tesis 1a. CXXXIII/2015, de rubro: “Libertad de expresión. Relación entre el lenguaje dominante en una sociedad y la construcción de estereotipos”. Primera Sala, 10a. época, registro: 2008939.
- \_\_\_\_\_. 2015c. Tesis 1a. CCCLXVIII/2015, de rubro: “Discriminación normativa. El legislador puede vulnerar el derecho fundamental de igualdad ante la ley por exclusión tácita de un beneficio o por diferenciación expresa”. Primera Sala, 10a. época, registro: 2010493.
- \_\_\_\_\_. 2015d. Tesis 1a. CCCLXIX/2015, de rubro: “Igualdad ante la ley. El legislador puede vulnerar este derecho fundamental por exclusión tácita de un beneficio o por diferenciación expresa”. Primera Sala, 10a. época, registro: 2010500.
- \_\_\_\_\_. 2014a. *Acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014*. Ministro ponente: José Fernando Franco González Salas. Resuelta el 13 de julio de 2021.
- \_\_\_\_\_. 2014b. Tesis 1a. CCLXXXIII/2014, de rubro: “Interés legítimo en el amparo contra leyes. Permite impugnar la parte valorativa de las normas jurídicas sin necesidad de un acto de aplicación, cuando aquéllas resulten estigmatizadoras”. Primera Sala, 10a. época, registro: 2006962.
- \_\_\_\_\_. 2014c. Tesis 1a. CCLXXXIV/2014, de rubro: “Estigmatización legal. Requisitos para tener por acreditado el interés legítimo en el amparo indirecto para combatir la parte valorativa de una ley y el plazo para su promoción”. Primera Sala, 10a. época, registro: 2006960.

- \_\_\_\_\_. 2011. Tesis jurisprudencial P/J. 67/2011, de rubro: “Representación proporcional en materia electoral. La reglamentación de ese principio es facultad del legislador estatal”. Pleno, 9a. época, registro: 160758.
- \_\_\_\_\_. 2008. Tesis 2a. LXXXV/2008, de rubro: “Igualdad. Casos en los que el juzgador constitucional debe analizar el respeto a dicha garantía con mayor intensidad”. Segunda Sala, 9a. época, registro: 169490.
- Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza. 2023. Juicios electorales TECZ-JE-02/2023 y sus acumulados. Magistrado Ponente: Sergio Díaz Rendón. Resueltos el 11 de febrero de 2023.
- \_\_\_\_\_. 2023a. Juicios electorales TECZ-JE-11/2023 y TECZ-JE-12/2023. Magistrado Ponente: Sergio Díaz Rendón. Resuelto el 30 de enero de 2023.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2023a. Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SM-JDC-12/2023 y sus acumulados. Magistrada Ponente: Claudia Valle Aguila-socho. Resuelto el 12 de febrero de 2023.
- \_\_\_\_\_. 2023b. Juicio electoral SUP-JE-1142/2023 y acumulados. Sala Superior. Magistrada Ponente: Janine Otálora Malassis. Resueltos el 29 de marzo de 2023.
- \_\_\_\_\_. 2022a. Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SUP-JDC-951/2022. Sala Superior. Magistrado Ponente: Indalfer Infante Gonzalez. Resuelto el 14 de septiembre de 2022.
- \_\_\_\_\_. 2022b. Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SX-JDC-62/2022. Sala Regional Xalapa. Magistrado Ponente: Enrique Figueroa Ávila. Resuelto el 17 de marzo de 2022.
- \_\_\_\_\_. 2022c. Recurso de reconsideración SUP-REP-123/2022. Sala Superior. Magistrado Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. Resuelto el 6 de abril de 2022.
- \_\_\_\_\_. 2021a. Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SCM-JDC-421/2021. Sala Regional Ciudad de México. Magistrado Ponente: José Luis Ceballos Daza. Resuelto el 3 de abril de 2021.
- \_\_\_\_\_. 2021b. Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SM-JDC-59/2021. Sala Regional Monterrey. Magistrado Ponente: Ernesto Camacho Ochoa. Resuelto el 20 de febrero de 2021.
- \_\_\_\_\_. 2021c. Recurso de reconsideración SUP-REC-117/2021. Sala Superior. Magistrado Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón. Resuelto el 10 de marzo de 2021.
- \_\_\_\_\_. 2021d. Recursos de apelación SUP-RAP-21/2021 y acumulados. Sala Superior. Magistrada Ponente: Janine Otálora Malassis. Resueltos el 24 de febrero de 2021.
- \_\_\_\_\_. 2020. Recursos de apelación SUP-RAP-121/2020 y acumulados. Sala Superior. Magistrada Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso. Resueltos el 29 de diciembre de 2020.
- \_\_\_\_\_. 2014a. Jurisprudencia 30/2014, de rubro: “Acciones afirmativas. Naturaleza, características y objetivo de su implementación”. Sala Superior, 5a. época.
- \_\_\_\_\_. 2014b. Jurisprudencia 43/2014, de rubro: “Acciones afirmativas. Tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material”. Sala Superior, 5a. época.